

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, INCISO A) Y 26, NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA, EN EL “PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANULES DE LOS INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.”.

Para dar claridad a mi disenso en este acuerdo, formularé mi voto en dos apartados. En el primero, destacaré las consideraciones que no acompañó y, en el segundo, expondré los fundamentos y razones de mi determinación.

1. Consideraciones que sustentan el acuerdo.

En los proyectos de resolución aprobados por la mayoría en la sesión del Consejo General se determinó sancionar de manera pecuniaria a los partidos políticos por registrar de manera extemporánea sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) atendiendo a los criterios siguientes:

Conducta	Criterio de sanción
Operaciones registradas en periodo normal	1% del Monto Involucrado
Operaciones registradas en el primer periodo de corrección	5% del Monto Involucrado
Operaciones registradas en el segundo periodo de corrección	10% del Monto Involucrado

2. Fundamento y razones de mi disenso.

En los anteriores procesos de revisión a los ejercicios ordinarios de los partidos políticos he manifestado mi voto en contra de que se sancione con una amonestación pública la infracción que se actualiza por no realizar los registros contables en tiempo real, esto es, desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, dado que no existe un efecto inhibitorio para la comisión de esta falta, tan es así, que hemos observado que a lo largo del tiempo que se ha incrementado la actualización de esta conducta, por tanto, resulta pertinente se incremente el grado de reproche para, así, lograr el efecto disuasivo.

Sin embargo, no comparto el criterio mayoritario tomado por el Consejo General, esto, porque considero que, para llegar al criterio de sanción correspondiente, primero, deberíamos que implementar un proceso de revisión que permita determinar con certeza aquellos registros extemporáneos que sí actualicen la hipótesis normativa; segundo, establecer el grado de reproche que amerite cada uno de ellos, esto, atendiendo a las circunstancias específicas del caso y, tercero, de conformidad con lo anterior, tendríamos que determinar el criterio que permitiera delimitar el monto de la sanción y, considero que, no en todos los supuestos debe partirse del monto involucrado.

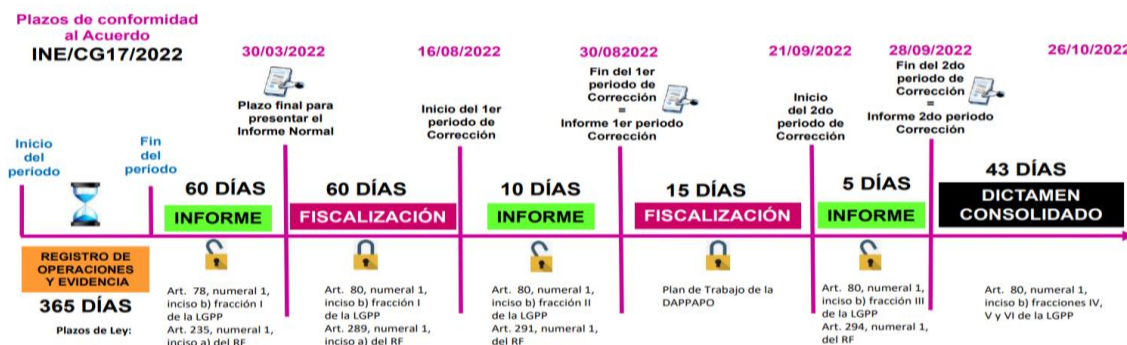
Por lo que, a continuación, expondré las motivaciones que me llevan a dicha determinación.

La fiscalización de los recursos públicos y privados que realiza este Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, respecto de sus actividades ordinarias, tiene como objetivo principal determinar que su origen, monto, aplicación y destino se ajuste a la normativa electoral.

Registrar de manera tardía o incompleta las operaciones en el SIF, no permite su adecuada revisión y confirmación por esta autoridad, vulnerándose, en mayor o menor medida, la facultad fiscalizadora que puede derivar en una obstaculización a dicha función.

Estas son las diferentes etapas del procedimiento de fiscalización:

CRONOGRAMA



PERIODO NORMAL



Como puede observarse en las imágenes que anteceden, las operaciones que los partidos políticos generaron durante 2021 se debieron ir registrando en el SIF en el plazo que el reglamento establece, esto es, dentro de los tres días posteriores a que se llevó a cabo la operación y en los diferentes momentos contables. Ejemplo:

Operación: Gastos		
Momento contable	Movimiento	Registro y complementos de registro
Primero	Se contrae la obligación mediante un acuerdo de voluntades (contrato).	Registrar el contrato (en su caso, aviso de contratación), póliza de diario, dentro de los 3 días posteriores a su celebración.
Segundo	Se reciben los bienes o servicios	Registrar: muestras, kárdex, notas de entrada y salida, etc., dentro de los 3 días posteriores al movimiento.
Tercero	Se emite la factura y se realiza el pago	Registrar: CFDI en formato XML y PDF, cheque, transferencia bancaria, dentro de los 3 días posteriores a que se haya llevado a cabo el movimiento.

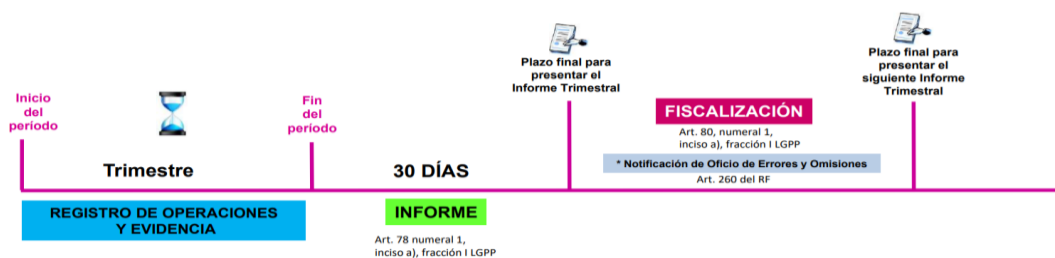
* Los movimientos dentro de una operación pueden presentarse en diferente orden

A lo largo de trescientos sesenta y cinco días de la anualidad en revisión, asimismo, dentro de este periodo, los partidos tienen la obligación de presentar informes trimestrales¹:

- Se presentan a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda.
- Todos los ingresos y los gastos que se reporten deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del CEN o CEE, respectivamente.
- Si de la revisión que realice la Comisión a través de la UTF, se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes.
- Los informes constituyen un precedente para la revisión anual que realizará la autoridad.

¹ Artículos 235, numeral 1, inciso a) de RF y 78 numeral 1, inciso a) de LGPP

- Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación de presentar el informe trimestral.

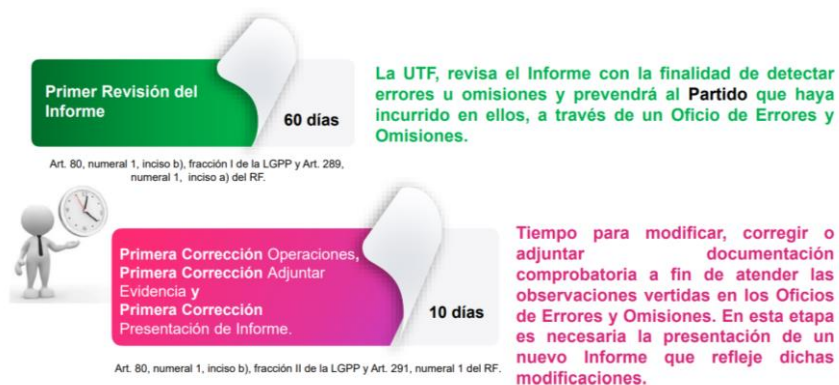


Si los partidos políticos realizan sus registros de manera extemporánea dentro de este periodo, es decir, previo a la presentación de su informe anual, se entiende que impidieron el ejercicio de revisión de los informes trimestrales, pero al momento de presentar su informe anual, las operaciones se encuentran registradas y, por ende, los ingresos y los egresos reportados. Esta falta de oportunidad, no permite analizar adecuada y oportunamente la información, afectando las labores de fiscalización de la autoridad.

Durante la presentación de los informes trimestrales, una de las tareas que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), consiste en comparar la evolución de los registros entre esos informes y el informe anual. Esto permite identificar los incrementos y reducciones a nivel cuenta y los movimientos erróneos, mediante análisis y cruces de información en tiempo real con lo reportado; por ello, la la extemporaneidad, no permite analizar adecuada y oportunamente la información.

PRIMER PERIODO DE CORRECCIÓN

16 al 30 de agosto de 2022



Dentro de los sesenta días posteriores a la conclusión del año a fiscalizar, los partidos presentan sus informes anuales a la autoridad fiscalizadora para su revisión, misma que se efectuará dentro de sesenta días. Dentro de este plazo, esta autoridad notifica el primer oficio de errores y omisiones a los partidos, quienes, a su vez, tienen diez días para hacer las aclaraciones correspondientes; los registros faltantes, modificar registros erróneos y presentar la nueva versión de su informe. Aquí, pueden presentarse dos situaciones:

1. Solicitar a los partidos a través del primer oficio de errores y omisiones, se corrijan los registros ya existentes o se realicen los registros complementarios, atendiendo a los diferentes momentos contables de los registros ya existentes.
2. Que se registren operaciones por ingresos o egresos que el partido no reportó, pero que la autoridad se percató de ellos a través de los procesos de verificación (monitoreos, circularizaciones, revisión a las finanzas información obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

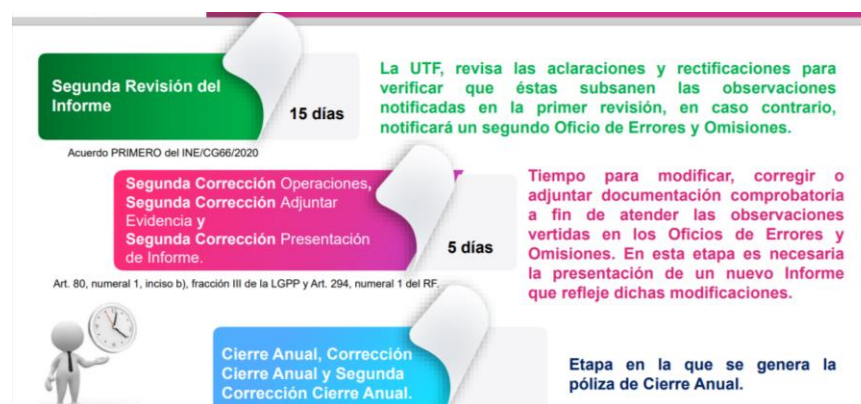
En el primer caso, estamos ante ingresos o egresos reportados y en el segundo ante no reportados, como sabemos el grado de reproche para cada supuesto es diferente, pero hablando específicamente del registro extemporáneo en estos casos, las consecuencias son distintas en el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la UTF.

En el segundo caso, estamos ante operaciones que no fueron reportadas de manera voluntaria y espontánea. No solo se registraron extemporáneamente, sino que,

además, tuvo que mediar un requerimiento de la autoridad para que se reconociera de manera formal el ingreso o el egreso. Si a esto agregamos que, al momento de registrarlo, se hace de manera parcial, sin adjuntar la totalidad de las evidencias que permitan tener certeza del origen, monto, aplicación o destino de los recursos, obliga al ente fiscalizador a observarlo en el segundo oficio de errores y omisiones.

SEGUNDO PERIODO DE CORRECCIÓN

21 al 28 de septiembre de 2022



Concluida la etapa de revisión en el primer periodo de corrección, la UTF elabora un segundo oficio de errores y omisiones, en el que da cuenta a los partidos sobre las observaciones que no lograron ser atendidas, ya sea porque no hubo aclaración alguna o porque la misma no resultó suficiente para que se dilucidara la infracción cometida. Los partidos tendrán cinco días para hacer las aclaraciones correspondientes, los registros que hagan falta, modificar registros erróneos y presentar la nueva versión de su informe anual.

Hasta este momento, la autoridad fiscalizadora puede encontrar los inconvenientes siguientes:

1. Por el factor tiempo, es probable que de manera tardía los proveedores o aportantes, así como las autoridades con las que se intercambia información (SHCP, IUF, SAT, CNBV) hayan respondido los requerimientos y que de

esas respuestas deriven nuevos supuestos susceptibles de sanción (cuentas bancarias no reportadas, movimientos bancarios no reportados que se convierten en ingresos o egresos no reportados, operaciones con proveedores por montos superiores a los reportados u operaciones que no fueron reportadas, solo como ejemplos).

2. Una inadecuada revisión de las evidencias, derivado de la corrección o registros complementarios tardíos.

En el primer supuesto, estamos ante operaciones que, como no fueron objeto del primer oficio de errores y omisiones, se dejan en seguimiento o se mandan a un procedimiento oficioso, todo ello, por la falta de claridad de los partidos al reportar sus ingresos y egresos, esto trae como consecuencia que no se le haya dado su garantía de audiencia y que, de momento, no se tengan los elementos suficientes para poder imponer una sanción al partido, lo cual implica que la actividad fiscalizadora se tenga que alargar y se utilicen recursos financieros y humanos en una revisión posterior por la falta de certeza que ocasiona el indebido reporte de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

REPORTE DE OPERACIONES Y SUS DIFERENTES MOMENTOS CONTABLES Y, POR TANTO, DE REGISTRO

Como ya se mencionó líneas arriba, cuando se reportan ingresos o egresos de las finanzas de los partidos políticos, se generan diferentes momentos contables, pues no necesariamente la operación se agota en un solo momento, esto es, de manera primigenia se genera un acuerdo de voluntades entre el partido y un proveedor de bienes o servicios en el que se establecen ciertas condiciones y prestaciones (contrato), acuerdo que si supera las 1500 UMA deberá realizarse un aviso de contratación, por tanto, estamos hablando de un primer registro.

Posterior a ello, el partido tiene la obligación de ir registrando los entregables que haga el proveedor de los bienes o servicios prestados, esto puede suceder en parcialidades y se deberá registrar cada una de ellas, por otro lado, deberá registrar el CFDI en el momento en que se haya emitido y esto depende de las condiciones

que se hayan pactado en el acuerdo de voluntades, así como la forma de pago, la cual también podrá ser en parcialidades y cada entrada o salida de recursos deberá registrarse.

Expuesto lo anterior, es dable concluir que cada registro en el SIF en los diferentes momentos contables, resulta de suma importancia para la verificación del origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, de lo contrario no se tendría plena certeza del manejo de los recursos, por ejemplo, aunque el partido haya registrado un contrato y la forma de pago de manera correcta, si no registra las evidencias de los bienes o servicios recibidos, la autoridad no tiene forma de corroborar o tener certeza sobre lo reportado por el partido.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM

En la nota circulada por la UTF mediante la que comparte los posicionamientos de los partidos políticos respecto al cambio de criterio en la sanción a las infracciones cometidas por registros extemporáneos en el SIF, destaca el argumento sobre que *el procedimiento para determinar el monto involucrado es incorrecto, ya que, al tomar en cuenta cargos y abonos se cae en una violación al principio non bis in ídem.*

En relación con este punto, cabe destacar que este argumento se ha hecho valer por los partidos políticos en recursos de impugnación presentados en contra de las resoluciones correspondientes a informes de campaña, en donde se ha sancionado el registro extemporáneo con sanción pecuniaria, ejemplo de ello está la sentencia dictada dentro del medio de impugnación identificado con la clave SUP-RAP-210-2017² y al respecto se ha manifestado que los partidos políticos deben registrar las operaciones sobre una base de flujo de efectivo, lo cual implica la obligación de identificar el origen y destino de los recursos, registrando paralelamente un movimiento de cargo y uno de abono, es decir, a través de una representación contable dual de la entidad (partida doble). Cabe señalar que derivado de la

² Sentencia que puede ser consultada en la liga <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-210-2017>

sentencia en comento se aprobó la tesis X/2018 FISCALIZACIÓN. EL REGISTRO DE OPERACIONES EN TIEMPO REAL DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DEBE REALIZARSE EN CADA MOMENTO CONTABLE DE UN BIEN O SERVICIO.³

Así, el principio invocado representa una garantía de seguridad jurídica de los procesados que se ha entendido extendida del ámbito penal a todo procedimiento sancionador, en una vertiente, el sentido de prohibir la duplicidad o repetición de procedimientos respecto de los mismos hechos considerados delictivos, y en otra modalidad, para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una doble valoración o reproche de un mismo aspecto. Tal situación se actualiza solamente cuando existe **identidad en el sujeto, hecho y fundamento o inclusive bien jurídico**, por lo que, cuando una persona lesiona bienes jurídicos diferentes, esa situación actualiza la comisión de varias infracciones distintas, aunque se trate de los mismos hechos, por lo que se le debe sancionar por cada ilícito perpetrado.

Por tanto, no se viola ese principio, porque a una persona se le instruyan dos procesos por ilícitos distintos, derivados de los mismos hechos, siempre y cuando se haya puesto en peligro bienes jurídicos diversos, esto es, lo que se prohíbe es que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos, con base en preceptos que protegen el mismo bien jurídico.

En el caso, registro extemporáneo de operaciones en el SIF, no se viola el principio *non bis in ídem*, ya que las sanciones se imponen por no reportar en tiempo real operaciones que corresponden a momentos contables distintos; es decir, no se sanciona por los mismos hechos.

No pasa desapercibido que el registro por flujo de efectivo corresponde al periodo de precampaña y campaña y ante lo vertiginoso que resulta la actividad de

³ FISCALIZACIÓN. EL REGISTRO DE OPERACIONES EN TIEMPO REAL DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DEBE REALIZARSE EN CADA MOMENTO CONTABLE DE UN BIEN O SERVICIO.- De la interpretación de los artículos [59 y 60 de la Ley de Partidos Políticos](#); [17, numerales 1 y 2](#); [18, numerales 1 y 2](#); [33, numeral 2, inciso a\)](#); [38, numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral](#), así como de los principios de transparencia y rendición de cuentas, se advierte que los partidos políticos deben registrar a través del sistema de contabilidad en línea, las operaciones de precampaña y campaña sobre una base de flujo de efectivo, respetando la partida doble, esto es, el cargo y el abono, lo cual también implica que respecto de un mismo bien y/o servicio, registren cada uno de los momentos contables por los cuales transite un concepto de ingreso o gasto, pues representan momentos económicos distintos. Esto es, el plazo de “tres días posteriores” previsto en el Reglamento de Fiscalización, para el registro contable de operaciones, aplica tanto para ingresos, a partir de que se realicen, como para egresos, desde el momento en que ocurran, en el entendido de que, los ingresos se realizan cuando se reciben en efectivo o en especie, y los egresos ocurren cuando se pagan, se pactan o se recibe el bien o servicio. En consecuencia, con independencia del cargo y el abono en su contabilidad, los partidos deben reconocer en forma total y en tiempo real las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que le afecten económicamente, pues las transacciones se pueden efectuar en diferentes momentos derivado del desfase de tiempos entre una y otra, que puede fluctuar desde minutos, días, meses o años.

operaciones en estas etapas, las transformaciones internas y los eventos que afecten económicamente al sujeto obligado, lo cual implica que la contabilidad de los partidos políticos, deben reflejar las entradas y salidas de la totalidad de los movimientos contables que realicen, registrando en todo momento un cargo y un abono⁴.

Así, el plazo de tres días posteriores para el registro contable de operaciones es aplicable por igual tanto a ingresos (a partir de que se realicen) como a egresos (desde el momento en que ocurran), ello es así, porque los partidos políticos tienen la obligación de reportar en los plazos establecidos en la normatividad cada uno de los movimientos contables, aun cuando pertenezcan a la misma operación.

En el caso concreto, al tratarse de operaciones de base acumulada y de transacciones que implican el movimiento de recursos financieros y el reconocimiento al incremento patrimonial no debemos perder de vista, como ya se ha explicado en el rubro anterior, que deben reconocerse el total las transacciones realizadas, lo cual implica afectación a diversas cuentas, de conformidad con la devengación contable, esto es, al momento en que suceden las cosas (cuando se suscribió la operación, cuando se recibió el bien o servicio y cuando se realizó el pago).

CRITERIO DE SANCIÓN

Considero pertinente no perder de vista que la infracción se ha cometido de manera excesiva por algunos partidos y que por ello se está contemplando una sanción que inhiba esta conducta, al observar que dicha falta solo amerita una amonestación pública, pueden verse motivados a cometerla de manera desmedida en los ejercicios ordinarios, lo cual demerita la función de rendición de cuentas a la que están obligados, rendición que, debemos recordar, no es para el INE, sino para la sociedad mexicana, por lo que, al entorpecer la fiscalización de sus recursos,

⁴ Artículo 33, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Fiscalización

impiden la transparencia con la que deben regirse y ponen en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público.

Así, las sanciones que el Consejo General puede imponer respecto a esta infracción no se encuentran tasadas en la normativa legal ni reglamentaria, por lo que debe ceñirse a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales⁵, para ello, como en toda individualización de la sanción, está sujeto a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-05/2010:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Si bien es cierto que, el Consejo General ha determinado a lo largo de los años criterios específicos de sanción para cada conducta infractora, también lo es que, si en un ejercicio o en un sujeto obligado identifica circunstancias que ameriten

⁵ I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; (...) IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (...) con la cancelación de su registro como partido político."

modificación al criterio que se había venido sosteniendo, tiene la facultad de modificarlo, siempre y cuando se encuentre debidamente fundado y, sobre todo, motivado.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio sostenido por el TEPJF, Sala Regional Toluca, al resolver el recurso de apelación identificado ST-RAP-4/2022 y ST-RAP-7/2022 acumulado, en el que textualmente menciona que, *el órgano fiscalizador puede modificar sus criterios y razonamientos con los que previamente ha valorado la conducta de los sujetos obligados; empero, en tal supuesto tiene el deber jurídico de justificar y motivar de manera reforzada y pormenorizada tal cambio de directriz, a efecto de atender los principios de certeza y seguridad jurídica, así como para garantizar que, en todo caso, el partido político afectado eventualmente pueda controvertir las razones que sirvieron de asidero para esa variación en el análisis de sus operaciones.*

Expuesto lo anterior, podemos concluir que el Consejo General tiene la facultad de modificar los criterios de sanción, siempre y cuando se encuentren respaldados por las razones que motivan su decisión, esto es, que los argumentos tengan la fuerza para justificar la determinación.

En el caso que nos ocupa, considero que sí existe una justificación para reflexionar el cambio en el criterio de sanción, pero para ello, se sugiere se contemple el grado de afectación a la función fiscalizadora de conformidad con lo expuesto líneas arriba y con los elementos siguientes:

- A. Si el monto total de una operación se encuentra reconocido por el partido mediante el registro en el SIF, éste y los registros complementarios que se hayan realizado de manera extemporánea podrán sancionarse sin que se tome como base para la sanción el monto involucrado.

Al respecto, se sugiere 1 UMA por cada registro extemporáneo, esto es, si bien se considera la siguiente sanción del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se parte de la sanción más baja correspondiente a la fracción II.

- B. En los casos en que el monto total de una operación no esté reconocido por el partido mediante el registro en el SIF (esto es un ingreso o egreso no reportado o no reportado con veracidad), sí deberá considerarse el monto involucrado como base para imponer la sanción, esto en razón que dichas situaciones sí ponen en riesgo la certeza del origen o destino de los recursos.

Se considera que una sanción del 1% y 5% sobre el monto involucrado, según corresponda al primero o segundo periodo de corrección, pueden permitir la inhibición de la conducta infractora, asimismo, partir de esta base permitiría acrecentar el grado de reproche en atención a cumplimiento o no de los partidos políticos en ejercicios posteriores.

Lo anterior, dado que se estaría teniendo en cuenta el grado de obstaculización de la función fiscalizadora, esto es, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, lo cual abonaría a la motivación para justificar el cambio de criterio en la imposición de la sanción y se atendería una de las principales preocupaciones de los partidos políticos, esto es, que se están multiplicando los montos involucrados porque se sanciona cada registro efectuado en los diferentes momentos contables de una misma operación, imponiendo, en su opinión, una sanción desproporcionada.

CONCLUSIONES

Primero. A manera de reflexión, se considera que si bien el grado de reproche a los registros extemporáneos en el SIF sí depende del momento en que se haya presentado dicho incumplimiento, no se debe perder de vista que se puede convertir en una falta sistemática que conlleve la obstaculización importante de la facultad fiscalizadora de la UTF, esto, porque un registro que se presentó de manera extemporánea en el periodo normal, puede acarrear consecuencias relevantes durante las observaciones realizadas en los oficios de errores y omisiones si no contamos con la voluntad de los partidos políticos de subsanar dichos errores u omisiones cometidas en la rendición de cuentas.

Segundo. Como quedó expuesto, el hecho de registrar de manera extemporánea en el periodo normal no afecta la tarea fiscalizadora de igual manera que en los periodos de corrección, toda vez que, estos últimos afectan sustancialmente los procesos de fiscalización considerando que no fueron realizados durante todo el ejercicio ordinario o se ejecutaron de forma errónea, por lo que, una vez notificados los oficios de primera vuelta, se cargaron registros que, por los plazos establecidos en la norma para analizar la información, no existe posibilidad de valorar aquella que no fue proporcionada oportunamente. Adicionalmente, se afecta la posibilidad de realizar diligencias con terceros, ya que, los plazos no son suficientes para recibir y analizar las respuestas.

No se puede perder de vista que los partidos cuentan con toda la anualidad que se revisa para llevar a cabo sus registros, sin embargo, durante agosto (primer periodo de corrección) y septiembre (segundo periodo de corrección) del año posterior aún se encontraban registrando y adjuntando evidencia que comprobara las operaciones realizadas el año previo.

Tercero. Se considera correcto que se sancionen los registros extemporáneos de cada momento contable y, por tanto, de cada registro complementario, esto porque la falta de oportunidad en el registro de cualquiera de ellos puede implicar opacidad en la información y falta de certeza en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, lo cual incluye los cargos y los abonos, por tanto, se concluye que no se actualiza la vulneración al principio *non bis in ídem*.

Cuarto. Para la imposición de la sanción, se sugiere se considere el grado de afectación a la función fiscalizadora de conformidad con lo siguiente:

- A. Si el monto total de una operación está reconocido por el partido mediante el registro en el SIF, éste y los registros complementarios que se hayan realizado de manera extemporánea podrán sancionarse sin que se tome como base para la sanción el monto involucrado.

Se sugiere 1 UMA por cada registro extemporáneo, esto es, si bien se considera la siguiente sanción del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se parte de la sanción más baja correspondiente a la fracción II.

- B. En los casos en que el monto total de una operación no esté reconocido por el partido mediante el registro en el SIF (esto es, un ingreso o egreso no reportado o no reportado con veracidad), sí deberá considerarse el monto involucrado como base para imponer la sanción, esto en razón que dichas situaciones sí ponen en riesgo la certeza del origen o destino de los recursos.

Se considera que una sanción del 1% y 5% sobre el monto involucrado, según corresponda al primero o segundo periodo de corrección, pueden permitir la inhibición de la conducta infractora, asimismo, partir de esta base permitiría acrecentar el grado de reproche en atención a cumplimiento o no de los partidos políticos en ejercicios posteriores.

Bajo estas consideraciones es que no acompaño el criterio de sanción que se aprobó mayoritariamente en el Consejo General sobre el registro extemporáneo de las operaciones en el SIF y formulo este voto particular con consideraciones que, desde mi punto de vista, tendríamos que delimitar claramente, para implementarlas en los próximos ejercicios de revisión.

Consejera Electoral

Norma Irene de la Cruz Magaña

*Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

